Se rehace proyecto al andar

Nils Castro

Profesor y diplomático.

Durante el último período del siglo xx, América Latina registró dos grandes cambios de signo opuesto, que los diferentes países de la región han experimentado según sus respectivas características. Cada uno de estas sacudidas se incubó a lo largo de años, se precipitó en corto tiempo y ha dejado un conjunto de secuelas que aún se entrecruzan.

Buena parte de las contradicciones, incertidumbres y oportunidades que estos países ahora viven resultan de la superposición de ambas estelas, que todavía mantiene inconcluso al segundo de esos movimientos. Probablemente hará falta un estremecimiento adicional para destrabarlo, pero aún están formándose los actores idóneos para que eso tenga un buen desenlace.

Primer movimiento

El primero de estos cambios comenzó al atascarse las políticas desarrollistas que, alcanzado su apogeo con el nacionalismo revolucionario de los años 60, se agotaron sin encontrar relevo en los 70 y los 80, y poco después fueron desmanteladas tras el deterioro de ese fenómeno

y el colapso del «socialismo real». Su pérdida dio pie a la rápida entronización de la hegemonía neoliberal, masivamente implantada sobre el espacio vacío —o mal defendido— que la extenuación del desarrollismo y el derrumbe soviético habían dejado.

La alternativa neocolonial y reaccionaria desplegada por la ofensiva neoconservadora encabezada por la señora Margaret Thatcher y el presidente Reagan—cuyo primer objetivo era destruir la Unión Soviética y todo lo que esta había significado—, también consiguió éxitos de otro alcance: aprovechó las decepciones legadas por la decadencia de aquel nacionalismo, los angustiosos procesos inflacionarios, y las incertidumbres que siguieron a la caída de las dictaduras latinoamericanas. En tan propicias circunstancias, a las prédicas neoliberales se les facilitó infiltrar la cultura política ya establecida, y capitalizar a su favor unas fugaces ilusiones de estabilización económica, tranquilidad social, restablecimiento de derechos civiles, empleo y sosiego.

Las demás corrientes socialistas y socialdemócratas no quedaron menos damnificadas. Tapándose con la hoja de parra de la «tercera vía», gran parte de sus mentores europeos optaron por doblegarse a la dominación unipolar norteamericana y a la hegemonía ideológica neoliberal y, con la excusa de evitar peores daños, renunciaron a su legado histórico y a sus banderas reivindicativas. Si eso les permitió temporalmente conservar cierta participación en gobiernos cada vez más conservadores, a mediano plazo los llevó a perder su identidad y, con ella, a millones de electores. A la postre, a mayor claudicación socialdemócrata, mayor primacía obtuvieron los nuevos regímenes de derecha.

El movimiento opuesto

Pero el reinado neoliberal precipitó su propio colapso, una vez que los efectos de sus políticas pronto revelaron su auténtica naturaleza, lo que propició la emersión de la siguiente sacudida regional. Lejos de generar nuevas «derramas» de prosperidad, el tsunami neoliberal dejó a los gobiernos cada día más debilitados, a los pueblos más desvalidos y expuestos, y a la fortuna de las naciones dependiendo de los azares de una economía de casino. Al cabo, a la agudización de la pobreza, el malestar y el desamparo sociales, y las consiguientes oleadas de inconformidades e insubordinaciones, se les agregaría el estallido de otra gran crisis global. Y, enseguida, el descrédito —aunque todavía no el remplazo— de los dogmas ideológicos que habían justificado esas políticas.

No obstante, el fracaso y desprestigio de los preceptos del credo neoliberal no implicó que sus favorecidos cayeran en el infortunio. Su repertorio de prédicas y recetas se desacreditó; sin embargo, la mayor parte de las reformas neoliberales ya materializadas y los privilegios cosechados por sus beneficiarios han seguido vituperados pero vigentes. Con lo cual todos nos vemos en una situación como la descrita por Antonio Gramsci, donde lo viejo se hunde pero lo nuevo que habrá de sepultarlo todavía no ha logrado constituirse.

Esto hace de América Latina un inmenso tablero en disputa. En algunos sitios antes, en otros después, las derechas fueron vencidas o quedaron esquinadas, mas no conformes ni derrotadas. Esta historia no ha concluido. Aun sacadas del gobierno, las burguesías más recalcitrantes conservaron la mayor parte de su poder económico y mediático, una enorme influencia cultural y, pasada la sorpresa, hoy movilizan un vasto concierto internacional y una importante capacidad para reevaluar tanto sus antiguas experiencias como los nuevos medios para concebir e instrumentar su contraofensiva.

¿Qué saldos y retos quedaron?

Para visualizar nuestras opciones también es preciso aprender autocríticamente de los errores. El desarrollismo latinoamericano y el modelo soviético no fueron vencidos solo por la potencia de la acometida neoconservadora abanderada por la Thatcher y Reagan, sino también por sus propios desatinos. Si hemos de retomar la iniciativa, no será repitiéndolos.

En su primera etapa, aquel desarrollismo aprovechó oportunidades de industrialización al resguardar nuestros mercados, sustituir importaciones y crear un área de empresas estratégicas en manos del sector público. Entre sus resultados sobresalieron el perfeccionamiento de la soberanía, el fortalecimiento de la clase obrera y de la clase media, progresos en la urbanización, seguridad social y educación, etc. No obstante, sus gobiernos asimismo prohijaron una burguesía y una burocracia que se ocuparon demasiado poco de incrementar la productividad y la competitividad de sus empresas y de la economía nacional y, a la vez, abusaron de las empresas del Estado como instrumentos para ofrecer empleo y servicios que no competían al perfil de esas empresas, sin velar por su autosostenibilidad.

La excesiva prestación y perduración de protecciones, privilegios y subsidios ocasionó, con frecuencia, un estilo de gestión y unas empresas que así resultaron crecientemente ineficientes y costosas, y al cabo insostenibles, a la vez que a un desmedro contable que imposibilitaba controlar y prever los costos, o detectar la desviación de recursos, así como una cerrazón aislacionista respecto a la progresiva aparición de nuevas oportunidades —tecnológicas, culturales y económicas— en el contexto continental y mundial, que dejaban de aprovecharse.

Prácticas equivalentes proliferaron en el socialismo «real» de modelo soviético. En ambos casos se les ha señalado como «capitalismo de Estado» para rechazar que tuvieran naturaleza auténticamente socialista, aduciendo que allá el Estado, o su burocracia, habían tomado el lugar y el papel de la burguesía. No es esta lo ocasión ni el espacio para discutirlo. Pero, de cualquier forma, esas eran unas prácticas que obstruían o impedían cumplir dos roles históricamente positivos de la gestión capitalista: el afán de competitividad que incentiva renovar las fuerzas productivas, y la organización obrera que busca disputarles a los dueños (o a los administradores) de las empresas una mayor participación en las decisiones sobre las condiciones de trabajo y repartición de las ganancias. Es decir, a la larga, eran prácticas ineficientes o remolonas que, Nils Castro

en el primer caso, eran igualmente perjudiciales tanto para el interés capitalista como para el socialista.

Así las cosas, luego de su etapa progresiva, el desarrollismo latinoamericano no generó a mayor plazo (o sus promotores no previeron a tiempo) los instrumentos necesarios para superar estas deficiencias. Con lo cual, luego de sus éxitos iniciales, empezarían a sobresalir sus desviaciones menos deseables —estilo burocrático de gestión, persistencia de tecnologías ineficaces y contaminantes, falta de capacidad para incursionar en mercados exteriores, desviación de recursos y corrupción, baja tasa de ganancias y de aportación a otros sectores de la vida nacional, etc.con un saldo de estancamiento económico y pérdida de confianza ante unas sociedades progresivamente más educadas y demandantes. A la postre, esto deparó derivaciones que la ofensiva neoconservadora —y las prédicas neoliberales que la acompañaban— pudieron extrapolar de manera crítica para explotar a favor suyo la secuela de malestares y decepciones provocadas por aquellas deficiencias, sin reconocerles mérito alguno a los progresos antes logrados.

Como bien sabemos, para que cualquier sistema socioeconómico (y cualquier nación) pueda subsistir y prosperar es indispensable que, día tras día, sepa darse los medios de gestión y producción necesarios para alcanzar mayor eficiencia, productividad y competitividad. En la medida en que la sociedad se vuelve más compleja e ilustrada, su sistema productivo y la gestión pública tienen que hacerse más eficientes. En el caso particular de las empresas latinoamericanas de la época desarrollista —tanto las públicas como las privadas—, solo de ese modo hubieran podido mantener la sostenibilidad, la pujanza, la responsabilidad social, la utilidad pública y la credibilidad que hicieran factible y provechoso asegurar su reproducción y continuidad. Pero la mayor parte de las veces esto no fue el caso. Como tampoco lo fue para otras instituciones de interés público.

Y vino el lobo

En ese contexto, en los años 80 y los primeros 90, la evolución de las circunstancias políticas y económicas mundiales —la carrera armamentista, el estancamiento del sistema socioeconómico y político soviético, etc.— favoreció que las «reformas estructurales», presuntamente adecuadas para superar esas deficiencias, pasaran a consistir en la aplicación masiva de los preceptos neoliberales. Pero estos se resumían en un repertorio de recetas que, aunque se presentaran como las oportunas para enderezar dicha situación, en realidad no venían a implementar ese objetivo, sino a

aprovechar la coyuntura en beneficio del capital privado transnacional. Bajo la piel de oveja de que la gestión privada—una vez liberada de los controles y restricciones estatales que supuestamente la ahogaban— sería la más eficaz para superar el estancamiento y propiciar un nuevo auge, de hecho impulsó la privatización de las infraestructuras y los recursos productivos creados bajo el impulso desarrollista, para transferírselos a los dueños locales y transnacionales del sector privado (y aprovecharlos como base para instalar otros negocios no necesariamente vinculados al desarrollo nacional).

En pocos años, con el pretexto de aliviar al Estado y al erario público del costoso deber de administrar y subsidiar un amplio conjunto de empresas e instituciones, las cacareadas reformas estructurales facilitaron traspasárselas a las corporaciones —por lo general extranjeras— capaces de adquirirlas, con lo cual las respectivas economías resultaron enajenadas y desnacionalizadas, y el Estado quedó drásticamente achicado, debilitado y constreñido a desempeñar las funciones socialmente ineludibles que no interesan al capital privado: básicamente, las de mantener el orden público y dispensarle de ciertos servicios de salubridad y enseñanza para la población de menores recursos —insolvente para adquirirlos de mejor calidad en el sector privado—, además de cobrar los impuestos con qué costearlos.

Esto implicó una severa reforma de las normas de regulación de la economía y de los modos de propiedad o control sobre los medios de producción y circulación de bienes, servicios y comunicaciones. Tal reforma, de paso, sirvió para «sincerar» los mecanismos esenciales del capitalismo, es decir, regresar a su forma salvaje, eliminando la mayor parte del acervo de conquistas sociales y laborales, y los derechos que el movimiento popular y la defensa de la soberanía nacional habían atesorado durante los dos siglos anteriores de luchas alentadas por el humanismo, el liberalismo y los anhelos de justicia social. La gestión capitalista volvió a desembarazarse de múltiples obligaciones o restricciones de interés humanitario.

No hace falta repetir aquí una historia ya conocida. Dicho de manera abreviada, luego del efímero período durante el cual pareció que los males más angustiosos dejados por la agonía del desarrollismo —burocratismo, hiperinflación, devaluación monetaria, desempleo, empobrecimiento, inestabilidad política, y regímenes autoritarios— iban a quedar atrás, las restructuraciones y políticas neoliberales enseguida empezaron a suscitar otra generación de causas de irritación e inconformidad sociales. Si bien en algunos casos la situación fiscal y monetaria se estabilizó, como lo reclamaba el capital y lo exigían las instituciones financieras internacionales, se recrudecieron la precariedad del empleo, la

El tsunami neoliberal dejó a los gobiernos cada día más debilitados, a los pueblos más desvalidos y expuestos, y a la fortuna de las naciones dependiendo de los azares de una economía de casino. Al cabo, a la agudización de la pobreza, el malestar y el desamparo sociales, y las consiguientes oleadas de inconformidades e insubordinaciones, se les agregaría el estallido de otra gran crisis global.

marginación, el empobrecimiento la incertidumbre y la inseguridad.

De paso, vale recordar que la liberalización de los flujos de dineros y mercancías, y la eliminación o relajación de los controles y fiscalizaciones sobre sus movimientos no solo beneficiaron al capital privado transnacional de carácter lícito, sino también al ilícito y a los medios de «lavarlo». Por lo tanto, favorecieron a las nuevas modalidades de criminalidad internacional.

Al propio tiempo, el debilitamiento de los controles sobre los movimientos financieros internacionales y sobre el funcionamiento de la economía mundial pronto se tradujeron en causa de repetidas crisis. En cascada, y con variadas características, estas fueron haciéndose cada vez peores y menos justificables, hasta culminar en la catástrofe mundial y multimodal que detonó en 2007, la cual, entre otras cosas, evidenció el fiasco que acabaría de desacreditar y desautorizar todo el repertorio neoliberal.

La frustración y la inconformidad colectivas se expresaron en una multicolor ola de movimientos populares y de reacciones políticas y electorales que en los últimos años ha dado un nuevo perfil a los comportamientos latinoamericanos, sobre todo en Sudamérica. En tajante contraste con lo que continúa pasando en Europa occidental, donde la mayor parte de los partidos socialdemócratas tradicionales aún no se han desprendido de las consecuencias programáticas y sociopolíticas de conchabarse con el neoliberalismo, en América Latina dichas reacciones han puesto en marcha nuevos modos de abanderar a las izquierdas, así como una nutrida pluralidad de gobiernos progresistas.

Sin embargo, esto nos sitúa ante varias situaciones y derroteros que todavía están en proceso de formarse y reclamarán una mayor variedad de análisis. Se ha generalizado un escenario sociopolítico e ideológico-cultural que nos obliga a releer a Gramsci. La propuesta desarrollista quedó en el pasado, y a su vez la neoliberal se desplomó de manera vergonzosa, pero el desarrollo histórico todavía no ha elaborado las alternativas programáticas que podrían remplazarlos. Asimismo, los sistemas políticos que por decenios permitieron ponerles y reponerles gobiernos a nuestros

países —y que *mutatis mutandis* sirvieron para administrar los proyectos liberales, desarrollistas y neoliberales— en muchos de ellos hoy escasamente pueden mantener la gobernabilidad. No obstante, salvo iniciales pininos, todavía no logramos reformarlos o sustituirlos por otros que viabilicen mejor representatividad y participación sociales.

Donde las protestas sociales desbordaron al sistema político establecido —Venezuela, Bolivia, Ecuador—, los consiguientes procesos de «refundación» constitucional han permitido importantes reformas democratizadoras y modernizadoras del sistema político. La excepción es Argentina, donde el viejo sistema logró reponerse con menos cambios. Pero donde la insatisfacción social posibilitó elegir un nuevo tipo de gobierno —progresista— sin haber reformado ese sistema —Brasil, Argentina, Paraguay, El Salvador, Perú—, estos aún se ven precisados a actuar con las restricciones o la camisa de fuerza de un balance conservador de las normas vigentes y de las relaciones con los demás órganos del Estado, como lo había instrumentado el sistema político antes instaurado por la democracia oligárquica y el neoliberalismo. La excepción es Nicaragua, donde luego del período revolucionario, los gobiernos liberales reformaron el sistema a su propia medida.

Sin contrincante mayor

Dicho de otro modo, estamos *en proceso*, en una situación ambivalente donde se viven unas condiciones prometedoras, pero inconclusas, instaladas por el repudio al anterior estado de cosas más que por adhesión a un nuevo proyecto. Esto es, sabemos qué se rechaza, pero todavía hay mucha, rica, creativa, y hasta riesgosa incertidumbre sobre las alternativas que más adelante nuestras iniciativas podrán forjar. Y en la lucha por reconformar esa situación en uno o el otro sentidos, no jugamos solos; también actúan las tradiciones anteriormente sembradas por la vieja cultura política, así como el poder mediático y conspirativo de la gran burguesía local y de los consorcios transnacionales.

Nils Castro

¿Aparte del multiforme rechazo colectivo que eligió a esos gobiernos progresistas, de dónde viene esta situación de estar en proceso? El tema requiere distintas consideraciones previas, entre las cuales se pueden señalar las siguientes. Para empezar, una observación de Perogrullo, pero no por ello de menor relevancia: los gobiernos progresistas ahora existentes —y que en Sudamérica son mayoría—no resultaron de revoluciones. Hemos tenido levantamientos populares que derribaron gobiernos, pero no revoluciones conscientes, que entronizaran gobiernos revolucionarios, con poderes revolucionarios y sostenidos por fuerzas revolucionarias, como en el siglo xx pensábamos que podía suceder. Lo que tenemos son nuevos liderazgos que, dentro del agotamiento de los sistemas políticos dejados por la pasada generación, vencieron electoralmente a las viejas opciones, para llevar otro tipo de gente al gobierno, aunque no al poder.

Pero, antes de que ese repudio colectivo —contra el viejo sistema político, contra las secuelas de las políticas neoliberales, etc.— tomara esta fortaleza político-electoral, sufrimos un enorme desarme ideológico y programático. En los años 60 y los 70, en una atmósfera de auge del «factor subjetivo» de la revolución, las ideas que orientaban a las organizaciones revolucionarias (y cuyas recíprocas confrontaciones ideológicas a veces también las desquiciaron) tenían previsto otro género de procedimientos y desenlaces. Pero si bien esas ideas alentaron tanto heroísmos como martirios, y estremecieron al Continente y lo hicieron avanzar, salvo contadas excepciones no produjeron las victorias esperadas. Así, cuando el sistema soviético colapsó (y cuando la revolución china renunció a su opción radical), las organizaciones que habían animado esas ideas ya habían sido derrotadas o andaban en busca de otros caminos. La rápida entronización de la ideología neoliberal fue posible porque irrumpió sobre un espacio político-cultural que ya se replegaba.

Sobre la marcha

En otras palabras, las ideas que en el pasado período les dieron inspiración, identidad y propósito a aquellas izquierdas ahora no son —ya no pueden ser— las que guían a los actuales gobiernos y proyectos progresistas, ni a los partidos que los apoyan. Es decir, que también las ideas las tenemos *en proceso*. Los principios y los objetivos a largo plazo son los mismos, por eso la orientación y el ánimo se pueden sostener y desarrollar. Pero, de nueva cuenta, estamos haciendo camino al andar y, en consecuencia, las ideas se están rearticulando, poniendo a prueba y mejorando sobre la marcha. Por ahora, no son nuestra guía para la acción, sino productos

de la acción emprendida. Muchos de los efectos de aquel vacío ideológico aún están por superarse, lo que se logrará mientras tales experiencias nos ayuden a formar una nueva cultura política.

En el ínterin, estos gobiernos progresistas y los desarrollos sociales que los han traído a donde están no se encuentran realizando un proyecto anticapitalista; es más, en la mayor parte de los casos, ni siquiera están desmantelando todas las estructuras legadas por los gobiernos neoliberales, sino corrigiendo sus extremos más aberrantes y mitigando sus peores efectos.

No en balde, lo mismo José Inácio (Lula) da Silva que José (Pepe) Mujica, por ejemplo, han probado fehacientemente que la izquierda sabe gobernar el sistema existente mucho mejor que la derecha. No solo lo administra mejor, sino que lo lleva a mitigar las injusticias y atrasos que más agobian a nuestros pueblos, y a darles una vida más digna. Pero lo hacen sin remplazar el sistema, en el entendido de que el intento de cambiarlo de modo radical aún no sería aceptado, ni mucho menos secundado, por las mayorías que los eligieron democráticamente. Porque el voto recibido para gobernar fue el que se le concedió *al programa electoral prometido* en campaña, no a uno radical de transformación del sistema.

Pero formar la cultura política que lleve a que la mayoría popular demande un programa más radical es una responsabilidad y una función propia de los partidos y movimientos revolucionarios, más que de estos gobiernos progresistas. Para erradicar todas esas estructuras y remplazarlas por otro sistema, habría que contar con un proyecto alterno que las pueda sustituir de manera coherente. Uno que no vuelva a echar por tierra los principios de productividad, racionalidad y transparencia indispensables para asegurar el desarrollo de las fuerzas productivas, sin el cual luego sería imposible satisfacer las necesidades populares y fundamentar confianza. Porque sabemos que la temporal ausencia de ese proyecto no podrá suplirse reinstalando el viejo esquema desarrollista, que funcionó en una época hace mucho inexistente. Además, porque tampoco tendría sentido reinstalar un modelo que en su última fase generó consecuencias inaceptables y se volvió insostenible. Mientras tanto, se trabaja por tanteo y error, y sobre la marcha se discuten y ensayan otras soluciones y proyectos originales.

Así las cosas, es comprensible que los maximalistas de antes y de ahora denuncien con enardecida impaciencia que estos no son gobiernos revolucionarios. Porque, en efecto, no lo son. Como, si ese fuera su intento, tampoco hubieran llegado a ser gobiernos. Lo que de ningún modo implica que todos sus protagonistas se han vuelto unos socialdemócratas adocenados. Antes bien, la cuestión está en que hubiera carecido de sentido

plantearle un propósito radical a una masa de electores que todavía no está dispuesta a apoyar ese género de alternativa, y hasta a jugárselo todo —sus medios de subsistencia, la familia y la vida— para lograrla, defenderla y sostenerla. Es decir, una masa a la que todavía no hemos ofrecido ese proyecto convincente y factible. En consecuencia, el discurso de esos críticos, por bravío que parezca, no se condesciende con la pertinaz anemia de los resultados que su práctica política obtiene.

El asunto quedó claramente descrito en la metáfora guevarista de la vanguardia y el pelotón principal de una columna guerrillera. La vanguardia no debe adelantarse tanto que pierda el contacto con el grueso del pelotón, o se extravíe, como tampoco demorarse al punto de refrenar el avance de la columna. Ser revolucionario supone hacer, en cada momento, lo más revolucionario que el desarrollo popular pueda asumir. Quienes en los años 60 y los 70 hicieron suya la idea de que el vanguardismo foquista podía acelerar el parto revolucionario desafortunadamente no pudieron lograrlo, porque la realidad no era así. Una pléyade de los mejores latinoamericanos de esa época pereció en el intento sin que aquella revolución se produjera: el pueblo al que buscaban redimir no estaba preparado para compartir sus convicciones y aún menos para acompañarlos. Esto no demerita la inmensa calidad ética de su entrega a ese ideal, pero hace ver que antes es preciso desarrollar condiciones de sustentación social. Por ahora, esta será, de nueva cuenta, la primera tarea de una etapa por venir.

Todo eso vuelve a traernos al tema del desarme o repliegue ideológico que acompañó al desplome del sistema soviético y el abandono del maoísmo. Una inmensa porción de los actuales contingentes populares ya reclama un cambio de fondo para transformar su condición de vida y expectativas. Pero esto (aún) no quiere decir que ya estaría dispuesta a sacrificar sus precarias condiciones de vida y alzarse en armas por un proyecto que aún no la ha persuadido. Revolución no es aquella que se intenta —o se dice intentar—, sino la que, una vez puesta en marcha, será efectivamente sostenida, defendida y reproducida por grandes fuerzas populares.

¿Están verdes las uvas?

En nuestros días, el disgusto y la esperanza populares han electo a estos gobiernos progresistas, brindándoles una inusual ocasión a sus dirigentes. En las respectivas sociedades se abre un compás histórico distinto de lo que fue casi toda la tónica anterior. Sería imperdonable desaprovechar esta ocasión posicionándose como meros críticos de tamaña coyuntura. Hay que zambullirse en ella y consolidarla, como oportunidad de organización de los trabajadores, de los pobres y marginados, para que estos puedan mejorar sus condiciones de supervivencia y lucha, desarrollar sus propios instrumentos para hacer más adecuados sus medios de vida, aprender a informarse y desarrollar aptitudes productivas, y no solo para recibir instrucción política. Y no apenas de la organización y educación que sirva a los propósitos de una élite de conspiradores, sino para servir a los fines de los propios pobres y trabajadores. Como las pasadas experiencias lo han demostrado, la vanidad y el empeño de reducir las organizaciones populares a meras correas de trasmisión de una élite, o de crearlas para este fin, solo conducen a engañarse con simulaciones, y a frustrarlas.

Así pues, como en la vieja fábula de la zorra en el parral, ¿están verdes las uvas o es que a los vendimiadores les falta arrojo? Ni lo uno ni lo otro se demostrará juzgando la situación desde la barrera. Para que la fruta consiga madurar como se debe hay que acompañarla a lo largo del cultivo.

En efecto, esta etapa no es la de la revolución antes soñada —¿por qué habría de serlo si los revolucionarios no la hemos producido?—, sino la de cultivar conciencia independiente y organizada en el seno de esa plebe desengañada y recelosa que todavía es presa de los medios de comunicación y manipulación manejados por los grandes consorcios de la prensa impresa o electrónica. Aún falta ayudarla a emanciparse de la hegemonía cultural ejercida por la clase propietaria de los medios tanto de subsistencia como de información, que todavía subordina a la mayor parte del pueblo. Esta es oportunidad de cultivar pensamiento crítico y criterio propio en el seno de ese pueblo, para que él mismo pueda dirimir su propia agenda de los asuntos que de veras le importan para salir de sus condiciones de sometimiento.

Todo ello obliga a preguntarse con qué fuerzas se cuenta para seguir adelante y de qué «adelante» cabe hablar. En la óptica de los cambios experimentados por América Latina en esas últimas dos etapas, hace falta observar cuánto ha ocurrido y qué sigue pendiente.

En su momento, la hegemonía neoliberal se tomó todo el Continente en menos de diez años. Ahora, la respuesta popular ya lleva más de diez luchando por abrirse paso. ¿A qué atribuir la diferencia? La oleada neoliberal se convirtió en un tsunami porque cayó sobre un campo que ya estaba en crisis, luego de que los viejos proyectos nacionalistas y revolucionarios dejaron de cumplir sus expectativas. Hoy por hoy buscamos recuperar ese ámbito a partir de la fuerza de un disgusto y un afán populares a los cuales, sin embargo, todavía es necesario proponerles formas y objetivos de mayor alcance histórico. Y lo hacemos enfrentados a unos

Nils Castro

enemigos del cambio que aún pueden contraponernos poderosos recursos, que será preciso superar por nuevos medios. Lo que nos exige desplegar una gran creatividad.

En el plano político

En realidad, en esta última etapa, ¿qué ha cambiado y qué falta por cambiar? Los cambios más relevantes han estado ocurriendo en el plano político y en el de la recuperación de la soberanía nacional y popular. Hoy la mayor parte de los países suramericanos y un par de naciones centroamericanas tienen gobiernos progresistas, lo que hace dos o tres lustros nadie preveía. Por añadidura, el imperialismo estadounidense, que hace dos décadas no lo hubiera permitido o lo habría castigado severamente, ahora se conforma con influir y presionar para que tal situación no vaya mucho más allá.

Dentro de ese plano, estos gobiernos progresistas procuran subsanar, o mitigar, modalidades históricas de injusticia y marginación sociales, mejorar la atención a los sectores más necesitados (con no pocos éxitos en los campos de la educación, nutrición y salud), luchar contra la pobreza, corregir la injusticia distributiva, mejorar la situación en materia de derechos humanos. Y por lo general buscan, además, reanudar el desarrollo de las fuerzas productivas, muchas veces en términos negociados con empresas transnacionales. Paralelamente, intentan coordinar y robustecer políticas de bloque con las que resistir las presiones de las grandes potencias y el imperialismo, e iniciar procesos de integración, como el fortalecimiento del MERCOSUR, el proyecto del ALBA, la constitución de UNASUR y los primeros pasos en dirección a la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe (CEALC). No obstante, al propio tiempo, todavía deben lidiar con una amplia trama de principios, reglas y mecanismos —internos e internacionales— legados por la anterior etapa neoliberal, lo que hace de ellos una peculiar especie de regímenes mixtos.

Por si fuera poco, en la mayoría de los casos se trata de gobiernos obligados a llevar a cabo la gestión pública acorralados en la estrechez de las reglas y mecanismos recibidos de sistemas político-constitucionales resultantes de las transiciones a la democracia tradicional, que en el pasado fue preciso pactar con los mandos oligárquicos y militares durante los esfuerzos para desmantelar las dictaduras. Esta es una modalidad de sistema político de democracia condicionada que los pueblos latinoamericanos hace rato encuentran restrictiva y decepcionante. Para decirlo en pocas palabras: esta segunda etapa de cambios aún se halla estructuralmente incompleta, tanto en sus mecanismos internos como en sus proyecciones.

¿Más de lo mismo?

Una hipótesis en boga dice que seguiremos adelante —tanto para avanzar como para consolidar— en tanto que estos gobiernos progresistas puedan reelegirse y cumplir metas adicionales. Pero esto solo será verdad cuando sus sucesores sean más ambiciosos y audaces que sus predecesores, cosa que solo ocurrirá cuando deban su respectiva elección a masas ciudadanas más avanzadas y demandantes. De no ser así —si para volver a elegirse se acepta dar marcha atrás— solo podrá preverse una reedición del trillo reformista, antaño adoptado por la derecha socialdemócrata, que se contenta con prometer una gradual secuencia de progresos y acto seguido se va de uno a otro retroceso, a lo largo de una barranca de concesiones ante cada amago de las derechas y las transnacionales, o de conciliación con ellas.

Lo que significa que esa bonita hipótesis tiene un embrión de verdad, optimista, que, sin embargo, no puede sostenerse por sí solo. Para que, en las condiciones democráticas que deseamos, se haga factible desmantelar la herencia neoliberal, domeñar los excesos capitalistas y avanzar en el camino de la equidad y la solidaridad, hace falta la movilización consciente de fuerzas populares que, sobre la base de compromisos programáticos más avanzados, escojan y elijan mejores propuestas y candidatos. Es decir, de masas organizadas y conscientes, cuya movilización convierta en fuerza material los principios, ideales, aspiraciones y objetivos de las izquierdas.

Para que esto se haga cierto, es preciso no solo sacudir críticamente la cultura política que la clase dominante ha implantado desde siempre como si respondiera a toda la sociedad, sino ir de su crítica sistemática a la formación de *otra* cultura política. Hace falta un amplio trabajo ideológico, que no solo consiste en ofrecer nuevas ideas y objetivos, sino que asimismo exige tolerarse mutuamente, cooperar entre todos los sectores de las izquierdas, y darle coherencia a lo que ellos representan para el conjunto de la sociedad.

Lo cual no supone que con todo ese legado tocará hacer tabla rasa. Al contrario, este deberá ser objeto de una depuración selectiva y reactualizadora, pues algunos de sus preceptos continuarán siendo necesarios, ya que apuntan a resolver deficiencias del sistema precedente. Depurar implica tirar la basura, pero también preservar los logros aportados por cada una de las épocas anteriores. Objetivos como la racionalidad y la transparencia fiscal y presupuestaria, la rentabilidad y la sostenibilidad de las empresas y proyectos, impedir el abultamiento improductivo de las instituciones, garantizar el incremento de la productividad del trabajo, etc., son igualmente indispensables para desarrollar las alternativas posneoliberales y poscapitalistas.

Ciertamente, el trabajo de ofrecer educación escolar y laboral, de organizar a las comunidades locales para mejorar su convivencia y servicios, de promover la sindicalización de los trabajadores, la agremiación de los profesionales, la asociación de los estudiantes y de las mujeres desde el punto de vista cívico, legal y participativo, figura entre las actividades propias de un gobierno progresista. Sin embargo, la formación, organización y movilización políticas de los sectores populares no es una tarea suya. Es una misión de los partidos y organizaciones políticas. Si a alguien puede denostarse por el rezago de la formación de esas fuerzas del cambio no es a los gobiernos sino a los partidos, a sus dirigentes y candidatos locales, a sus representantes municipales y parlamentarios. No puede ser de otro modo.

De lo que ahora se trata

Para ir a lo esencial del asunto, debe recordarse que el orden social y político previo —explotador, marginador, abierta o implícitamente autoritario—, al que es preciso sacudir mediante la crítica y cambiar en interés social, no

se estableció solo por la fuerza represiva y burocrática. Una vez instituido, ese orden se ha consolidado, se mantiene y se maneja, generalmente, a través de la influencia persuasiva y el reinado político y cultural de las clases dominantes, que se esmeran en maquillarlo como «natural» y, por ende, mejorable pero eterno.

En última instancia, de lo que se trata es de enfrentar y superar dicha hegemonía político-cultural de las clases dominantes desarrollando una contrapropuesta ideológica y cultural consecuente con los afanes y expectativas de las clases y grupos interesados en cambiar ese orden de cosas. No hay historia sin movilización popular. A la hegemonía subordinante, históricamente establecida, toca oponerle una contrahegemonía, en cuyo seno pueda idearse otro futuro, y organizar su construcción, que para ser colectiva asimismo deberá ser plural e incluyente. Solo por ahí podrá completarse el cambio que está en curso y emprender los que le sigan.

[©] TEMAS, 2011